



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés de enero de dos mil veintitrés

A22-209

ASUNTO:	APELACIÓN AUTO.
DEMANDANTE:	JOSÉ HUMBERTO SEVERINO MUÑOZ
DEMANDADO:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
RADICADO:	05001-31-05-016-2006-01212-02
DECISIÓN:	CONFIRMA AUTO

En la fecha indicada, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a decidir el recurso de apelación propuesto por la apoderada de la demandante frente al auto que aprobó y liquidó las costas en primera y en casación.

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- Mediante sentencia proferida el 29 de septiembre de 2009 por el Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín se ABSOLVIÓ a la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. de todas las pretensiones formuladas por el señor JOSÉ HUMBERTO SEVERINO MUÑOZ, a quien condenó en costas. (fl 124/139 archivo 01 expediente digital)
- Dicha decisión fue CONFIRMADA por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Descongestión Laboral, mediante sentencia del 29 de abril de 2011. Oportunidad en la que se abstuvo de condenar en costas (fl 169/182)
- Así mismo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 19 de noviembre de 2019 decidió no CASAR la decisión anterior y condenó en costas al demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$4.000.000.
- Mediante auto del 10 de febrero de 2020, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, efectuó la liquidación de las costas de primera instancia, fijándolas en la suma de \$4.496.900, teniendo en cuenta las agencias en derecho de primera instancia por valor de \$496.900 y las de casación por \$4.000.000
- Dentro del término oportuno la apoderada del demandante presentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE EN SU RECURSO

Como motivos de inconformidad expresa que se debe disminuir ostensiblemente el monto total fijado como costas y agencias en derecho en la primera y en la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral. Alega que se debe ajustar el valor de las condenas a la realidad social y económica del demandante, quien es una persona que no cuenta con empleo y mucho menos con una pensión de vejez, además es una persona de avanzada edad, nacida en 1949, que no cuenta con bienes propios. Agrega que al fijar las agencias en derecho, tanto el juez, como la Corte, no tuvieron en cuenta que estaban ante una persona desempleada, que había sido despedida, quien acudió a los órganos judiciales para reclamar sus derechos laborales y que por ser la parte débil de la relación laboral, debe tener especial protección al fijar las costas y agencias en derecho, fijando unos toques mínimos que no le afecten su sustento diario y el de su familia.

Además, en el derecho laboral y especialmente en el proceso, hay una evidente desigualdad de las partes, pues el trabajador no tiene más que su fuerza de trabajo que es su propio ser, con el cual obtiene el sustento y el de su familia, a la par que el empleador es poseedor de rentas y bienes de producción y se encuentra en una posición económica más ventajosa y dominante. Por eso el operador jurídico debe tener en cuenta este principio del derecho laboral y el de proporcionalidad para fijar unas costas y agencias en derecho mínimas y que no se constituya en una carga económica para quien tuvo que acudir a las instancias judiciales en procura de debatir una relación laboral, que consideró estaba siendo disfrazada por su empleador, es decir obtener un derecho al trabajo constitucionalmente amparado con las normas del derecho laboral.

Insiste en que en el presente proceso se debatió sobre un derecho fundamental, a la luz del preámbulo y de los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política: derecho al trabajo en condiciones dignas y supremacía de la realidad sobre las formas. En el ejercicio de esos derechos fundamentales debería regir el principio de gratuidad, más como la sentencia condenó en costas, el operador debe tener en cuenta que el trabajador se vio avocado a iniciar un proceso para defender esos derechos, y teniendo en cuenta el principio de gratuidad y el principio de desigualdad, debe fijar unas costas mínimas que no afecten los ingresos del trabajador demandante.

Agrega que el valor total señalado en la liquidación de costas y agencias en derecho, no tuvo en cuenta ninguna de las circunstancias especiales indicadas, por cuanto el valor fijado para la primera instancia y el recurso de casación, deben reducirse a lo mínimo, para que sumados los dos momentos procesales, su valor total en contra del actor, sea inferior a un salario mínimo, pues la suma fijada de \$4.496.900 no se compadece con la especial protección que debe darse al trabajador y menos en este caso, en que la parte demandada está en superior condición económica. El monto total que se está impugnando mediante estos recursos, representa a 2020, 5.9 veces el salario mínimo legal mensual vigente, lo que representa para el demandante, laborar mínimo 6 meses con un salario mínimo legal mensual, destinando todo ese monto al pago de las costas y agencias en derecho.

De otro lado indica que el Acuerdo 1887 de 2003, señala a favor del empleador en primera instancia y en la Corte Suprema, un valor máximo, pudiendo entonces tomarse en cuenta unos montos inferiores al salario mínimo legal, sin embargo en el presente caso, la primera instancia fijó un salario mínimo y en la Corte se fijaron 5 salarios mínimos, o sea más del 50% del máximo permitido por el Acuerdo citado.

De otro lado establece que la facultad de variar las sumas impuestas en costas, se las da al operador jurídico (juez o Tribunal) el artículo 366 del Código General del Proceso que dice:

"Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, con sujeción a las siguientes reglas:

(...)

2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso."
(resaltado fuera de texto)

Por consiguiente solicita que se fije un monto muy inferior al señalado como costas y agencias en derecho, para que no sea el monto señalado, sino que el Juez y el Tribunal en su caso gradúe esta norma, para que no se afecten los ingresos laborales de la demandante y no se desestime el libre acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que el funcionario judicial al señalar las agencias en derecho se puede mover en la tarifa del Acuerdo citado tomando en cuenta los criterios del artículo 366 del C. G. del Proceso que nos hablan de "*otras circunstancias especiales...*"

3. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En lo que a las costas del proceso se refiere, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) no se ocupa de ellas, por lo que al tenor de la directriz que traza el artículo 145 ibídem, es claro que las normas a aplicar son las que contiene el CPC, derogado por el Código General del Proceso.

El artículo 365 ibídem, al referirse al tema, consagra un criterio objetivo para imponerlas, pues en el numeral 1º dice que "se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación...".

Por otro lado, en cuanto a la tasación de la condena en costas, el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de radicación de la demanda (1º de agosto de 2006 – fl 2 archivo 02), establece que:

"ARTICULO SEGUNDO.- Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva

desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento.

ARTICULO TERCERO.- Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.”

Por otro lado, en cuanto a la tasación de la condena en costas, en el CAPITULO II, numeral 2.1.2. establece que en los procesos ordinarios laborales, cuando las costas sean a favor del empleador, deben seguirse los siguientes criterios:

2.1.2. A favor del empleador:

Única instancia.

Hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Primera instancia.

Hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Segunda instancia.

Hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO. En los eventos en que las partes sean entidades administradoras, o éstas y el empleador, se aplicarán las tarifas del numeral 2.1.2.

Así mismo en el numeral 2.6.2.1. se fijan los criterios para fijar costas cuando se interpone el recurso de casación, así:

2.6. RECURSOS.

(...)

2.6.2. EXTRAORDINARIOS.

2.6.2.1. Casación.

Hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de un proceso ordinario en el cual la demandada tuvo que contestar demanda, presentar pruebas que llevaron a la demostración de la excepción de la inexistencia de la obligación, que fue un proceso que duró 3 años en primera instancia, casi 2 años en segunda instancia y 8 años surtiendo el recurso extraordinario de casación, considera la Sala que con fundamento en la norma transcrita, es procedente la condena en costas, y que los valores fijados como agencias en derecho, en primera instancia de un salario mínimo y en casación \$4.000.000, que equivale a 4.8 salarios mínimos de la época (\$828.116), se encuentran ajustados a las directrices del citado Acuerdo 1887 de 2003, que establece cuando las costas son a favor del empleador un tope máximo de 4 SMLMV en primera instancia y hasta 20 SMLV cuando se surte el recurso extraordinario de casación, pues el valor de las costas fijados en las diferentes instancias se encuentra por debajo del tope máximo determinado en el referido acuerdo, por lo que se encuentra ajustado a derecho y no hay lugar a la **MODIFICACIÓN** solicitada por el apoderado del **demandante**, debiéndose **CONFIRMAR** el auto objeto de apelación.

Sin costas en ésta instancia.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE.

PRIMERO: CONFIRMA el auto de origen y fecha conocidos mediante la cual se liquidaron las agencias en derecho, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **JOSÉ HUMBERTO SEVERINO MUÑOZ** contra **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A**, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO: Sin **COSTAS** en ésta instancia.

Lo resuelto se notificará por ESTADOS y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por ESTADOS No. 010 fijados hoy en la secretaria de este Tribunal a las 8 a.m.
Medellín 24 de ENERO DE 2023

Secretario